

III

Don Onofre Monzó Monzó, don Javier Martínez Monleón y don Julián Aguilar Rubio interpusieron por separado recurso de reforma contra la anterior calificación y alegaron: Que lo único que se trata de hacer es ejercer el derecho individual de renunciar a un cargo que ya no se quiere seguir desempeñando, derecho que no sólo está reconocido en la legislación ordinaria específica, sino que viene consignado como fundamental en la Constitución. Que se considera que la argumentación de la señora Registradora no se ajusta a derecho, puesto que el artículo 124 del Reglamento del Registro Mercantil no es de aplicación al supuesto que se contempla. Que se han cumplido todos los requisitos y formalidades dispuestas en el artículo 147 del Reglamento del Registro Mercantil y, por tanto, debe inscribirse su renuncia; y otra cuestión es la situación legal en que queda la sociedad anónima, situación que es responsabilidad de la Junta general por no nombrar a otros Consejeros, y la responsabilidad hay que exigírsela a dicha Junta con los medios que la legislación pone al alcance del Registro Mercantil. Que se considera una discriminación puesto que si se tratara de un Consejo de Administración de más de tres miembros si se admitiría la renuncia.

IV

La Registradora acordó mantener la nota de calificación, e informó: Que la calificación no es contraria a la letra y espíritu de la legislación mercantil, ya que el legislador ha pretendido evitar que puedan existir sociedades sin representación y administración, lo que haría inviable la sociedad. Que si es necesario que cuando una sociedad nace tenga una cabeza visible, un representante, incluso en el óbito de la sociedad, al disolverse y nombrarse liquidador, también es necesario la existencia de ese representante durante la vida de la sociedad (arts. 8.º y 9.º de la Ley de Sociedades Anónimas y 124 del Reglamento del Registro Mercantil). Que la sociedad para su vida de relación interna y externa necesita valerse de un órgano ejecutivo y representativo, lo cual hace que el órgano de administración sea necesario y permanente; por tanto, lo procedente en el caso debatido era haber convocado, el Consejo de Administración, Junta general con los requisitos legales y en ella presentar la dimisión y procederse a la designación de nuevo órgano de administración por lo que la representación social no queda en momento alguno interrumpida. Que el artículo 147 del Reglamento del Registro Mercantil, relativo a la dimisión y cese de administradores, regula el título inscribible en dichos casos. Que es principio admitido en Derecho, que en caso de conflicto entre Ley y Reglamento, debe prevalecer aquella por jerarquía normativa. Que el número mínimo de Consejeros es de tres por imperativo legal (arts. 9.º h y 123 de la Ley de Sociedades Anónimas, 124.1 d del Reglamento del Registro Mercantil y art. 16 de los Estatutos sociales) lo que hace inviable admitir la renuncia de Consejeros cuando lo dejan por debajo de ese número mínimo legal. Que no puede trasladarse a la Junta general la responsabilidad de no designar órgano de administración, por las siguientes razones: 1.º Porque el órgano de administración existente no ha realizado la actuación tendente a convocar Junta general extraordinaria; 2.º Porque la Junta general sin representante no puede actuar. Que se considera que el Registro Mercantil no es el organismo autorizado para exigir responsabilidad a la Junta general. Que, por último, se considera que la sociedad no puede quedar sin órgano de administración en base a los artículos 8.º f y 9.º h de la Ley de Sociedades Anónimas y 124 del Reglamento del Registro Mercantil, reforzada esta tesis para las Sociedades limitadas en el artículo 7.º, número 8 de la Ley y en el artículo 174, número 15 del Reglamento citado.

V

Los recurrentes se alzaron, por separado contra el anterior acuerdo, manteniéndose en sus alegaciones, y añadieron: Que el acuerdo impugnado insiste en los mismos argumentos legales aducidos en la nota de calificación, sin analizar ni tratar de desvirtuar los aducidos en el recurso de reforma. Que el artículo 147 del Reglamento del Registro Mercantil permite también utilizar la forma de dimisión empleada por los recurrentes. Que no se considera exista conflicto entre la Ley y el Reglamento.

Fundamentos de derecho

Vistos los artículos 1.732 y 1.737 del Código Civil; 122, 133, 138 y 141 de la Ley de Sociedades Anónimas y 147 del Reglamento del Registro Mercantil.

1. En el presente recurso se debate sobre la posibilidad de inscribir en el Registro Mercantil la renuncia formulada por los tres únicos miembros del Consejo de Administración de determinada sociedad anónima cuando consta haber sido notificada por vía notarial a la misma sociedad.

2. Sin prejuzgar ahora sobre la facultad que corresponde a los administradores para desvincularse unilateralmente del cargo que les ha sido conferido y aceptado por más que la sociedad pretenda oponerse a

ello (vid. arts. 1.732 del Código Civil, 141 de la Ley de Sociedades Anónimas y 147 del Reglamento del Registro Mercantil), no cabe desconocer que el mínimo deber de diligencia exigible en el ejercicio de ese cargo cuando todos renunciaron simultáneamente, y en consecuencia no se puede proceder a los nuevos nombramientos por cooptación que prevé el artículo 138 de la misma Ley, obliga a los administradores renunciantes, pese a su decisión, a continuar al frente de la gestión hasta que la sociedad haya podido adoptar las medidas necesarias para proveer a dicha situación (vid. arts. 127 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 1.737 del Código Civil), lo que en el caso debatido impone subordinar la inscripción de las renunciaciones cuestionadas hasta que haya sido constituida la Junta general —que los renunciados deben convocar— para que en ella pueda proveerse al nombramiento de nuevos administradores, evitando así una paralización de la vida social inconveniente y perjudicial, de la que aquéllos habrían de responder (vid. arts. 127-1.º y 133-1.º de la Ley de Sociedades Anónimas).

Ello armoniza además, con el contenido del artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando presupone la necesidad de aceptación de la renuncia por el órgano competente para proveer la vacante, por más que se trate de una aceptación obligada y meramente formularia.

Por todo ello esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso, confirmando el acuerdo y la nota de la Registradora.

Madrid, 26 de mayo de 1992.—El Director general, Antonio Pau Pedrón.

Sra. Registradora mercantil de Valencia

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

16045 *ORDEN de 4 de mayo de 1992 sobre cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 24 de mayo de 1990, sobre adjudicación con carácter interino de la Administración de Loterías número 105 de Madrid, a doña Blanca Reina González-Novelles.*

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con fecha 24 de mayo de 1990, en el recurso de apelación interpuesto por la Administración General del Estado, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 1987 que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Blanca Reina González-Novelles contra el acuerdo del Patronato para la provisión de Administraciones de Loterías de fecha 28 de septiembre de 1984, confirmada en alzada por el Ministerio de Economía y Hacienda en resolución de fecha 21 de noviembre de 1984, declarando tal acuerdo y resolución contrarios a Derecho y en consecuencia los anula, y declarando el derecho de la actora a que se le adjudique con carácter interino la Administración de Loterías número 105 de Madrid, cuya titularidad ostentaba su fallecida madre.

Resultando: Que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 103 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación promovido por el señor Letrado del Estado en la representación que le es propia, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 4 de julio de 1987, en los autos a que el presente rollo se contrae. Confirmamos íntegramente la expresada resolución, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta segunda instancia.»

Madrid, 4 de mayo de 1992.—P. D. (Orden ministerial de 22 de julio de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Enrique Martínez Robles.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Economía y Hacienda y Director general del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

16046 *ORDEN de 26 de mayo de 1992 por la que se autoriza a la Entidad «Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» (C-137) para operar en el ramo de Defensa Jurídica, según la clasificación de ramos de la Orden de 7 de septiembre de 1987.*

La Entidad «Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», inscrita en el Registro Especial de las Entidades Aseguradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenación del Seguro Privado, ha presentado en la Dirección General de

Seguros solicitud de autorización para operar en el ramo de Defensa Jurídica número 17 de los relacionados en el artículo 3.º, sobre clasificación de ramos en seguros distintos del de vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado («Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre de 1987).

De la documentación que adjunta la Entidad a la solicitud formulada se desprende que «Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente.

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Seguros ha acordado:

Autorizar a la Entidad «Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» para operar en el ramo de Defensa Jurídica conforme a lo establecido en el número 1 del artículo 15 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 3, 5 y 6 de agosto de 1985).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, a 26 de mayo de 1992.—P. D., el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

16047 *ORDEN de 26 de mayo de 1992 por la que se autoriza a la Entidad «Seguros Lagun-Aro, Sociedad Anónima» (C-572), para operar en el ramo número 6 de la clasificación de la Orden ministerial de 7 de septiembre de 1987.*

La Entidad «Seguros Lagun-Aro, Sociedad Anónima», inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenación del Seguro Privado, ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud de autorización para operar en el ramo de Cascos de Buques o embarcaciones marítimos, lacustres y fluviales número 6 de los relacionados en el artículo 3.º, sobre clasificación de ramos en seguros distintos del de Vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado («Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre de 1987).

De la documentación que adjunta la Entidad a la solicitud formulada se desprende que «Seguros Lagun-Aro, Sociedad Anónima», ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente.

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Seguros ha acordado:

Autorizar a la Entidad «Seguros Lagun-Aro, Sociedad Anónima», para operar en el ramo de Cascos de Buques o embarcaciones marítimos, lacustres y fluviales conforme a lo establecido en el número 1 del artículo 15 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 3, 5 y 6 de agosto de 1985).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, a 26 de mayo de 1992.—P. D., el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

16048 *ORDEN de 26 de mayo de 1992 por la que se autoriza la cesión de la totalidad de la cartera del ramo de vida de la Entidad «La Sud América, Compañía de Seguros sobre la Vida» (E-59), a la Entidad «La Sud América Vida y Pensiones Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» (C-660).*

La Entidad «La Sud América Vida y Pensiones Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud de autorización de la cesión de la totalidad de la cartera del ramo de vida y elementos patrimoniales de activo y pasivo de la Delegación en España de la Entidad «La Sud América, Compañía de Seguros sobre la Vida».

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada, se desprende que las citadas Entidades han dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 27 de la Ley de Ordenación del Seguro Privado de 1 de agosto de 1984, artículo 82 del Reglamento de 1 de agosto de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 3, 5 y 6 de agosto) y artículo 23 de la Orden ministerial de 7 de septiembre de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre de 1987).

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Seguros ha acordado lo siguiente:

Primero.—Autorizar la cesión de la totalidad de la cartera del ramo de vida y elementos patrimoniales de activo y pasivo de la Delegación

en España de la Entidad «La Sud América, Compañía de Seguros sobre la Vida», a la Entidad «La Sud América Vida y Pensiones Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».

Segundo.—Declarar la extinción y proceder a la cancelación de la inscripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Delegación en España de la Entidad «La Sud América, Compañía de Seguros sobre la Vida».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, a 26 de mayo de 1992.—P. D., el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

16049 *ORDEN de 26 de mayo de 1992, de revocación de la autorización administrativa a la Entidad «La Sucro, Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios», «en liquidación» (M-238), y de intervención administrativa de la liquidación.*

En el expediente administrativo abierto en la Dirección General de Seguros a la Entidad «La Sucro, Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios», «en liquidación», ha resultado comprobado que la Entidad incurre en la causa de revocación de la autorización administrativa prevista en el artículo 29.1.f) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, al haber cesado en el ejercicio de la actividad aseguradora.

A la vista de lo expuesto y de los demás antecedentes incorporados al expediente, a propuesta de la Dirección General de Seguros, este Ministerio ha acordado:

Primero.—Revocar la autorización administrativa concedida a la Entidad «La Sucro, Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios», «en liquidación», para el ejercicio de la actividad aseguradora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.f) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, y en el artículo 86.1.f) del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985.

Segundo.—Intervenir la liquidación de la Entidad «La Sucro, Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios», «en liquidación», al amparo de lo dispuesto en el número 3 del artículo 31 de la Ley de 2 de agosto de 1984, designándose Interventor del Estado de la liquidación de la referida Entidad al Inspector del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado doña María de los Dolores Barahona Arcas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, a 26 de mayo de 1992.—P. D., el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

16050 *ORDEN de 26 de mayo de 1992 por la que se autoriza a la Entidad «Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona», Mutua de Propietarios a Prima Fija (M-199), para operar en el ramo de Defensa Jurídica número 17 de la clasificación establecida en la Orden de 7 de septiembre de 1987.*

La Entidad «Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona», Mutua de Propietarios a Prima Fija, inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenación del Seguro Privado, ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud de autorización para operar en el ramo de defensa Jurídica número 17 de los relacionados en el artículo 3.º, sobre clasificación de ramos de seguros distintos del de Vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado («Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre de 1987).

De la documentación que adjunta la Entidad a la solicitud formulada se desprende que «Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona», Mutua de Propietarios a Prima Fija, ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente.

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Seguros ha acordado:

Autorizar a la Entidad «Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona», Mutua de Propietarios a Prima Fija, para operar en el ramo de Defensa Jurídica conforme a lo establecido en el número 1 del artículo 15 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 3, 5 y 6 de agosto de 1985).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, a 26 de mayo de 1992.—P. D., el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.